

LOS ACTORES SOCIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD

Jordi Borja*

1. Del socialismo utópico al utopismo marxista

La crítica de la ciudad surgida de la revolución industrial se confunde, en el primer pensamiento socialista, con la denuncia de los efectos sociales generados por el modelo de desarrollo económico: expropiación de los campesinos y emigración masiva a la ciudad, condiciones de trabajo insoporables, masas de desocupados y marginados (*lumpen*), hacinamiento y falta de equipamientos y servicios urbanos clásicos, sobreexplotación de los trabajadores fuera del lugar de trabajo por parte de los dueños de viviendas y comerciantes, etc. Esta crítica alimenta una corriente "anti-urbana" que ha estado siempre presente en el pensamiento socialista o crítico-radical, pero que no es propiamente marxista. Al contrario, Marx más bien tildaría a la ideología antiurbana de "socialismo reaccionario". A pesar de lo cual muchos marxistas han mantenido la confusión entre vida urbana y consecuencias sociales del crecimiento capitalista sin buscar ni analizar lo que puede haber de específico en la ciudad. Si la ciudad moderna es un simple reflejo de la estructura capitalista del sistema económico, su desarrollo y su crisis serán consecuencias directas de aquél. No es casual si, a pesar de las inteligentes observaciones de Marx sobre la urbanización y del excelente libro de Engels sobre las ciudades inglesas, no ha habido luego una tradición urbanística marxista. Esta incapacidad procede tanto de las raíces del socialismo utópico (que confunde ciudad y sociedad, aunque algunos de sus representantes queriendo criticar la sociedad hacen agudos análisis de la vida urbana, como Fourier, como del desplazamiento temático que efectúa el

marxismo al centrar su análisis de la sociedad en la organización de la producción, el capital y el trabajo. Hasta hoy una parte importante del análisis social de la ciudad de inspiración marxista adolece de este vicio de origen: no ver más allá de la ciudad como lugar de la producción capitalista y de la reproducción de la fuerza de trabajo.

El socialismo utópico será el causante, además, de una peligrosa tentación para el pensamiento progresista moderno: la de la construcción del modelo de ciudad ideal que será la expresión, el medio y el fin del modelo de sociedad que se quiere alcanzar. Socialistas utópicos teóricos como Fourier o prácticos como Owen proyectan la ciudad perfectamente planeada en cuyo marco se organizará una vida social sin contradicciones. Algunas de las ilusiones más peligrosas del pensamiento tecnocrático y a veces totalitario se manifiestan en estos planteamientos ingenuos o paternalistas: la legitimidad y la capacidad que se atribuyen los dirigentes (intelectuales o políticos) para ordenar la vida de todos, la creencia en que puede planificarse de forma completa y definitiva el futuro o la confianza en una racionalidad superior que se impone a individuos y grupos y que no admite la contradicción ni el conflicto. Los modelos del socialismo utópico generarán algunos conceptos míticos del urbanismo del siglo XX: la fe en el *plan* finalista, global, rígido y autoritario, el objetivo del *equilibrio* (territorial, demográfico) como necesariamente positivo y posible, el rechazo de la *diferenciación*, del pluralismo y en algunos casos hasta de la intimidad en favor de la transparencia y del colectivismo y la concepción del urbanismo *racionalista* o *funcionalista* como una tecnología al

* Profesor de Sociología Urbana de la Universidad Autónoma de Barcelona.

servicio de unos objetivos y de unas funciones previamente establecidas por políticos y técnicos, sin que deban participar en su elaboración o ejecución el conjunto de actores o grupos sociales interesados.

Todo lo dicho hasta ahora parece llevar a una conclusión desalentadora, si de lo que se trata es de relacionar la tradición intelectual marxista con el análisis de la ciudad. El marxismo, podría concluirse, nos aleja o nos impide el conocimiento concreto y complejo de la ciudad en lo que tiene de específico y de permanente. Y es cierto que la posición estructuralista puede degenerar, de base de partida para el análisis del funcionamiento del sistema urbano y de su relación con la organización económica y política, en obstáculo o deformación de tal conocimiento. Como también es verdad que la creencia idealista en el plan, el reduccionismo funcionalista o la persecución del equilibrio a toda costa pueden provocar más errores y catástrofes que otra cosa. Una cierta tradición socialista combinada con el dogmatismo ha formado un utopismo marxista sobre la ciudad, más peligroso que interesante. Pero ésta no es la única vía urbana que procedente de Marx llega hasta nosotros.

2. Marx: la ciudad en la historia

Nada más lejos de Marx que la ideología antiurbana. "La historia moderna es la urbanización del campo", afirma en los *Grundisse*. Tanto en *El Capital* como en *El Manifiesto* se exalta el papel revolucionario y progresivo de la ciudad frente al campo y se plantea la contradicción campo-ciudad no en términos tan abstractos como hacia el joven Marx en *La Ideología Alemana*, sino en términos casi tecnológicos modernos: la lógica anárquica y desenfrenada del capitalismo degrada la articulación industria-ciudad y hace necesario un planteamiento global del territorio que supere la antinomia campo-ciudad por la vía de la urbanización integral del territorio. Marx no cree en la posición romántica de crítica de la ciudad y elogio de la vida campesina. Al contrario, habla del "poder civilizador de la ciudad" y del "cretinismo de la vida rural" (*Manifiesto*).

En Marx se apuntan algunas ideas-fuerza que serán instrumentos principales para el análisis de las contradicciones de la ciudad del siglo XX, tales como:

— La ciudad, como mercado de trabajo, debe proporcionar unas condiciones de vida mínimas para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, aunque para ello se creen unos mecanismos y unos agentes de explotación (el comerciante, el casero); pero también da lugar a la intervención creciente del Estado en el proceso de reproducción (política urbana y social), que se define históricamente.

— La ciudad como territorio de la producción, donde la fábrica imprime carácter a la urbe industrial y ésta se convierte en capital fijo al servicio de la empresa capitalista y entra en contradicción con los propietarios apegados a la renta de la tierra.

— La ciudad como medio de acumulación de capital, mediante la especulación, la obtención de contratos o concesiones del Estado, la construcción y la gestión de viviendas y servicios, etc. que entra en contradicción con la tendencia al desarrollo de una Administración Pública más planificadora y más democrática.

— La ciudad como control social de los trabajadores y de las clases subalternas en general, atomizadas en la gran urbe, que únicamente pueden constituir una fuerza colectiva en el lugar de trabajo (el marxismo clásico minusvalora bastante las posibilidades de organización social de los ciudadanos y sólo tiene en cuenta las revueltas sociales esporádicas; falta asimismo una reflexión específica sobre el poder local).

— La contradicción dialéctica entre ciudad y campo, que es una forma de plantear la contradicción más general centro-periferia (Marx y Engels ya anuncian esta generalización en *El Manifiesto* cuando comparan la sumisión y civilización del campo por la ciudad al sometimiento de los pueblos primitivos por los pueblos civilizados y el consiguiente nacimiento del imperialismo moderno).

La lectura mecanicista o unilateral que de Marx han hecho muchos marxistas, especialmente los de orientación estructuralista, ha convertido estas ideas-fuerza en leyes de cumplimiento forzoso. Se olvida entonces que en la misma obra de Marx aparecen otros conceptos e intuiciones que obligan a ser mucho más prudentes y, si no fuera retórico y pedante, podría añadirse más dialécticos.

En Marx se encuentran elementos básicos para construir una teoría económica de la ciudad moderna: los conceptos de "condiciones generales de producción" y de "condiciones necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo"; la importancia que otorga a los procesos de concentración espacial y a los medios de circulación social y material; la intuición de que la ciudad organiza a los medios de consumo colectivo para la reproducción de la fuerza de trabajo; la utilidad del concepto general de "cooperación" aplicado no únicamente al lugar de trabajo, sino al conjunto de la organización social de la producción y del consumo, etc.

Pero sobre todo debe destacarse la aplicación compleja y contradictoria de todos estos conceptos cuando se trata de hacer inteligible los procesos sociales. Así, por ejemplo, el Estado organiza y financia las condiciones generales de producción y reproducción de la fuerza de trabajo, especialmente los medios de comunicación y de consumo colectivos, pero se generan, entonces, nuevas contradicciones: el aumento de la productividad social eleva la composición orgánica del capital (en que se gana por un lado y se pierde por el otro, dice Marx); las economías de aglomeración derivadas de la concentración se verán progresivamente contrarrestadas por las deseconomías (debido al costo creciente de las infraestructuras y equipamientos que debe financiar el Estado); la política urbana y social se enfrenta a la competencia anárquica entre los actores privados, que muchas veces dominan o superan a las Administraciones públicas; la organización del territorio supone

apropiarse, por parte del Estado, de las rentas urbanas parasitarias o especulativas que, por otra parte, alimentan a grupos sociales cuyo apoyo resulta indispensable al poder político, etc.

En resumen, Marx nos propone, en primer lugar, una visión optimista y progresiva de la ciudad. La ciudad es la civilización. En segundo lugar, Marx nos ofrece una interpretación socio-económica del desarrollo contradictorio de la ciudad, como resultado complejo de la interacción entre las lógicas estructurales y la intervención de los actores sociales.

La ciudad es una realidad doblemente histórica. Es un producto de la historia y es el lugar de la historia. Su existencia y su futuro se explican por un conjunto de factores complejos: económicos, demográficos, sociales, culturales, políticos y administrativos. Pero estos factores se manifiestan en forma de conflictos sociales, de confrontaciones ideológicas, de iniciativas urbanísticas y económicas y de cambios políticos que "ocurren" en la ciudad.

La "sociología urbana" que se deduce de la obra de Marx no es, pues, estructuralista, sino más bien historicista. Las estructuras ayudan a conocer la historia, pero no la pueden sustituir ni restituir. Y la historia la hacen los hombres y mujeres, los grupos y las clases sociales. La perspectiva urbana de Marx es materialista, en el sentido de que no considera a la ciudad como una creación de políticos o artistas, pero en ningún caso es doctrinaria. La ciudad de Marx no es el producto de una historia deshumanizada, sino la historia misma hecha carne y movimientos, de trabajo convertido en piedra y de memoria que es cultura.

3. Marx, marxistas y ciudad: un pragmatismo político

En Marx y Engels está la crítica de la ciudad existente, pero no la alternativa o el modelo de ciudad futura. No se considera la ciudad como el resultado del caos, de un desorden que hay que ordenar, sino de unos procesos sociales (estructuras y comportamientos) inteligibles y lógicos, que expresan contradicciones, generan conflictos y dan lugar a cambios económicos y políticos que repercutirán sobre la ciudad. El objetivo teórico y práctico del marxismo (entendido como doctrina y como movimiento social) es promover estos cambios. Su posición ante los problemas de la ciudad y las condiciones de vida de las clases trabajadoras será paralela a la que tenían antes la fábrica y la contradicción capital-trabajo: reivindicaciones que sirvan para organizar a los trabajadores, que mejoren sus condiciones de vida y que reduzcan los márgenes de maniobra del capital. El pragmatismo político del marxismo urbano se expone coherenteamente en el texto de Engels, *La cuestión de la vivienda*. No se trata de construir un modelo de ciudad, sino de proporcionar viviendas dignas a los trabajadores. El marxismo insistirá sobre todo en tres puntos:

a) Exigencia de viviendas y servicios básicos para los trabajadores y los barrios populares en

general. Crítica de la segregación y propuestas de urbanismo igualitario (igualdad de acceso a la ciudad como conjunto de bienes y servicios).

b) Responsabilidad de los poderes públicos que deben asumir la iniciativa de la construcción y gestión de las viviendas y servicios. Exigencia de planeamiento y crítica de las rentas especulativas y parasitarias y del comportamiento anárquico de los actores capitalistas.

c) Reivindicación de poderes locales democráticos basados en la elección popular y con competencias y recursos importantes que posibiliten el acceso de los representantes de los trabajadores al poder más inmediato (municipio) y que puedan resolver los problemas urbanos más acuciantes.

El pragmatismo político del marxismo urbano se acentuará en la medida que las fuerzas políticas, intelectuales y sociales que se inspiran en él desarrollen una importante actividad urbana y municipal a lo largo del último siglo, tanto desde la vertiente socialista o socialdemócrata como comunista.

Este pragmatismo actúa en un marco que no debiera aparentemente plantear excesivos problemas teóricos ni prácticos. Se trata de dar respuesta positiva a las demandas sociales urbanas inmediatas y poner un poco de orden en el comportamiento anárquico y especulativo de los agentes urbanos capitalistas. Y en la medida en que no se pueda remitir a la lógica estructural del sistema y al carácter clasista del Estado Central, para denunciarlo, evidentemente.

Pero la práctica de la izquierda marxista en los poderes locales no resulta tan simple y la teoría, o la falta de teoría, va a crear más de una contradicción.

El marxismo urbano va a oscilar, en su práctica, entre dos tendencias: hacia el ghetto o hacia la integración. En el primer caso se trataría de marginar en la medida de lo posible a los agentes urbanos capitalistas y de potenciar la acción del sector público local. Pero en seguida aparecen dos grandes obstáculos a esta política: la ciudad recibe las consecuencias de unas iniciativas y de unos procesos sociales y económicos que no son en absoluto controlables por los poderes locales (decisiones de inversión y de localización de actividades productivas y de movimientos migratorios, por ejemplo) y, además, el poder local se mueve dentro de unos márgenes legales y financieros que les sitúan en una gran dependencia del Estado Central. Es una opción que tiende a la marginación y a apoyarse en sectores sociales cada vez más minoritarios. La tendencia a la *integración* por la que opta más decididamente la socialdemocracia continental, sobre todo después de la segunda guerra mundial, y también algún comunismo (el italiano especialmente) busca la coordinación, la colaboración y, en cierta medida, la planificación de los agentes urbanos capitalistas, así como la negociación con el Estado Central, e intenta influir sobre la política y la legislación generales. Para esto desarrolla una importante ofensiva político-cultural (sobre temas como la planificación democrática, las autonomías locales y regionales, la implementación de una ambiciosa política urbanística y de servicios

sociales por parte de las Administraciones Públicas) y busca ampliar sus apoyos sociales hacia el conjunto de las clases medias.

Entonces se manifiestan las ambigüedades y contradicciones que resultan de la falta de un marco teórico mínimo.

El marxismo urbano ya hemos dicho que no propone ningún modelo de ciudad, ni de vivienda, ni de equipamiento, ni de organización del territorio. Es en principio un acierto y hasta cierto punto su fuerza. Pero si, en relación a su práctica, no se elaboran algunos modelos se puede acabar haciendo cualquier cosa de cualquier manera y para cualquier clase de gente. En algunos casos se ha dado este esfuerzo, político-intelectual (Italia, Austria, Escandinavia, aunque con resultados desiguales, y también experiencias en los otros países europeos: Inglaterra, Holanda, Francia, etc.), en otros se han asumido tal cual las modas y los modelos del momento, o del pasado (por ejemplo: Brasilia, "grandes ensembles", centros direccionales, de gestión burocrática, oferta uniforme de viviendas, mito de la gran ciudad o del crecimiento cuantitativo, etc.).

El urbanismo de los países socialistas, si bien ha tenido algunos aspectos positivos (control público del suelo y del crecimiento urbano, política igualitaria de equipamientos y servicios, restauración y conservación de centros históricos), ha resultado decepcionante, porque no sólo ha mantenido viejas oposiciones (campo-ciudad) y trasnochados "zonings" funcionalistas (industria-residencia-equipamientos) sino porque no ha sabido inventar nuevos modelos urbanísticos (al contrario, ha copiado el mal urbanismo desarrollista o cuantitativista) y no ha resuelto el problema de la vivienda y de la vida social en las grandes ciudades. Y cuando ha querido construir modelos urbanísticos futuristas ha caído en los errores totalitarios del socialismo utópico, sin su imaginación, o en los delirios tecnocráticos de los peligrosos "ménage à trois" entre ejército, monopolios y cúpula política de algunas realizaciones norteamericanas.

4. Ambigüedades y limitaciones del marxismo urbano occidental

Con todo no es este problema principal, el de la falta de modelos urbanísticos propios, el que ha debido afrontar el marxismo urbano occidental a lo largo del siglo XX. Se trata, en este caso, de un problema que procede de una actitud sana y realista inicial, democrática y no dogmática, que se va resolviendo en la medida que se combinan las experiencias prácticas desde los poderes locales, la reflexión y la innovación culturales por parte de técnicos-intelectuales (en su sentido más amplio) y la participación popular de los usuarios.

Otros son los problemas más graves y que proceden, no ya de la "situación objetiva", sino de las ambigüedades y limitaciones del marxismo occidental posterior a Marx.

En primer lugar la mala *conciencia reformista*. La izquierda europea ha sido como siempre reformista, pero casi nunca lo ha aceptado. La política

urbana de la izquierda marxista sólo podría ser reformista, en el mejor de los casos, pero una gran parte de las corrientes socialistas y, por descontado, comunistas, no podían asumirlo. Se ha hecho reformismo en urbanismo, vivienda, prestaciones sociales, equipamientos colectivos, etc.; pero, como no se podía reconocer, se sustituía la reflexión sobre lo que se hacía y la elaboración de proyectos ambiciosos y viables de transformación urbana, por la doble conciencia paralizante, fuente inagotable de conflictos y malentendidos. Se "teorizaba" sobre la necesidad de incidir y acentuar las contradicciones capitalistas o de "reforzar las bases urbanas" para organizar a los trabajadores para el "asalto final", o bien se razonaba que nada podía cambiar (en la vivienda o en el urbanismo) mientras no cambiara todo el sistema, y hasta la política municipal de la izquierda era contraproducente si creaba ilusiones de mejoras o aumentaba el consenso social. En los casos de esquizofrenia más leve se aceptaba que la política urbana de la izquierda podía contribuir a mejorar en algo la vida de los trabajadores y facilitar el arraigo de sus organizaciones políticas y sociales. Pero en general ha faltado una teoría y una estrategia (con la excepción de algunas corrientes socialistas, laboristas y socialdemócratas y, a partir de los años sesenta, de los comunistas italianos, aunque con reservas) para la transformación gradual de la sociedad desde las estructuras de poder local y a través de la política urbana (no únicamente, *of course*). El marxismo urbano, sospechoso siempre de reformismo, no ha querido aceptar que ser reformista consecuente es mucho, casi lo máximo que se puede ser, y para negarlo ha renunciado a pensar su práctica y a proyectar su futuro.

Un segundo problema, que no ha resuelto aún del todo el marxismo urbano y que va estrechamente ligado al anterior, es el de una teoría política propia de los *poderes locales*. El marxismo adolece de un defecto más general: la falta de una teoría política sobre el Estado y en especial sobre el Estado democrático. Lógicamente tampoco hay una teoría de los poderes locales. La tendencia socialdemócrata se ha inspirado, sobre todo, en la tradición liberal progresista que arranca de Tocqueville y posteriormente ha aplicado a los poderes locales los postulados y las funciones atribuidas al Estado del bienestar. Las corrientes socialistas de izquierda y comunistas han mantenido durante décadas un curioso dualismo: han ocupado con seriedad los municipios y han aplicado en ellos una política eficaz en favor de las mayorías populares, en general moderada y muy respetuosa de la legalidad, pero han conservado un discurso sobre el Estado de clase y la dependencia de los poderes locales respecto a aquél que los ha incapacitado, casi siempre, para inventar una política transformadora de las instituciones. No es sino a partir de los años sesenta y sobre todo de los setenta cuando el pensamiento marxista, tanto socialista como comunista (eurocomunista), empieza a desarrollar una reflexión sistemática sobre el poder local y su papel en la democratización del Estado, tanto desde organizaciones políticas (socialistas, comunistas franceses e italianos, Labour Party, socialismo es-

candinavo, holandés, etc.) como desde corrientes intelectuales que se inspiran en un marxismo gramsciano, en el mayo del 68, y en la tradición autogestionaria.

La falta de tradición teórica sobre los poderes locales ha ido ligada a la falta de teoría sobre las funciones y contradicciones específicamente urbanas y a la naturaleza de las alianzas de clase y de mecanismos de consenso social que son posibles en la ciudad y en la política municipal. En estos casos se oscila permanentemente entre dos tentaciones: el electoralismo sin principios ni objetivos (excepto conquistar mayores electores) y el sectarismo y la marginación minoritaria en nombre de una mal entendida política clasista.

El esquematismo, el "sociologismo" y el "mesianismo" de la tradición cultural marxista sobre el Estado y sobre las clases sociales han sido obstáculos que el marxismo urbano aún no ha terminado de vencer.

Un tercer problema es el de la ambigüedad del marxismo urbano frente al crecimiento económico y el fenómeno metropolitano. La tradición marxista, ya lo hemos dicho, es industrialista y urbanizadora, favorable a la concentración de la población y de las actividades como base del progreso y "antesala del socialismo". Por otra parte esta concentración se identifica con los monopolios y la constitución de grandes áreas metropolitanas que coloca casi siempre bajo el dominio del Estado Central en detrimento de los poderes locales. En la tradición urbana marxista han predominado, hasta la crisis económica de los años setenta, posiciones favorables al crecimiento "cuantitativo" de las ciudades, del parque de viviendas nuevas y de los equipamientos y de la actividad productiva. En el último período se ha empezado a poner el acento en la ecología, la calidad de vida, la recuperación de la ciudad y de los barrios tradicionales, etc. Esta ambivalencia se deriva de la falta de modelos económicos alternativos aplicados a las sociedades desarrolladas y del desconocimiento de la complejidad de funciones sociales y culturales de la ciudad de que históricamente ha adolecido el marxismo.

El desarrollo de un pensamiento urbano marxista en los últimos 15 años ¿ha resuelto estas limitaciones y ambigüedades? Es evidente que autores como Campos-Venuti y B. Sechi, Castells y Harvey, el grupo de "Espace et Société" y del "International Journal of Urban and Regional Research" han contribuido decisivamente a crear una cultura urbana marxista adaptable a nuestra época. Pero en general no ha habido una preocupación de los teóricos urbanos marxistas por intervenir prácticamente en la política urbana y municipal a través de su reflexión y de sus propuestas. Durante mucho tiempo se ha referido el análisis estructural y el discurso crítico y alternativo al análisis de las contradicciones, tendencias y posibilidades de la política urbana y a la formulación de propuestas viables y susceptibles de recibir el apoyo de mayorías sociales.

El desarrollo del marxismo urbano moderno se debe sobre todo a la práctica y a la reflexión convergentes de fuerzas políticas de izquierda con experiencias de poder local y de movimientos sociales o

ciudadanos (con la colaboración de técnicos o profesionales). Hoy el marxismo urbano se medirá por su capacidad de dar respuestas a:

— La crisis económica y al papel de la ciudad en ella (crisis del Estado del bienestar y de su nivel local, reconstrucción de la base productiva urbana, reinvenión del trabajo y de la cooperación social, etc.);

— Los procesos en marcha de nueva articulación entre Estado y poderes locales y a la demanda popular de descentralización y participación en la ciudad.

5. La ciudad y los actores sociales

El marxismo urbano moderno occidental se ha ido despojando de sus corsés doctrinarios para analizar la ciudad y hacer propuestas de política urbana y municipal. Para ello ha debido efectuar un triple reconocimiento (o renunciar a viejos dogmas). En primer lugar, ha debido reconocer la especificidad de la problemática urbana, no reducible a una lógica estructural general mecánica ni a planteamientos sociales reivindicativos. La izquierda marxista ha tenido que asumir el conjunto de funciones de la ciudad y ha debido elaborar proyectos que tengan en cuenta los intereses de una diversidad de grupos sociales.

En segundo lugar, el marxismo urbano ha asumido progresivamente el carácter específico de los poderes locales, ha recuperado viejas tradiciones liberales (Tocqueville) y radicales (auto-gestiones) y se ha planteado la democratización del Estado desde sus niveles municipales y regionales: autonomías, descentralización, participación popular, democracia de base, a través de un proceso gradual.

En tercer lugar, más recientemente, el marxismo urbano ha debido enfrentarse a los problemas derivados de la crisis económica y a la impotencia de los instrumentos tradicionales de la política urbana y municipal (planeamiento urbanístico finalista, multiplicación de servicios sociales según los esquemas del welfare state, no intervención en las actividades productivas, etc.).

Es decir, justo cuando la izquierda marxista ha ido asumiendo la problemática de la ciudad o metrópolis moderna, esta realidad entra en crisis: crisis de la ciudad (de su base productiva, como lugar de trabajo, como integración social...), crisis de los poderes locales (vaciados por arriba y contestados desde abajo, que tienden a la regionalización y a la descentralización) y crisis del urbanismo (inoperancia del planeamiento formal y rígido del territorio).

Esta confusa problemática se hace aún menos inteligible por la crisis de hegemonía urbana: se han perdido los grandes proyectos y no se manifiestan grandes agregados o movimientos sociales. No hay propuestas globales y enfrentadas para la ciudad, sino la atomización o fragmentación de intereses, la lucha entre grupos corporativos y la tendencia a la burocratización de la gestión urbana y social.

En estas condiciones el marxismo urbano debe resolver, ante todo, el problema de cuál va a ser su

base o el sujeto social de su política. El discurso clasista tradicional (burguesía, pequeña burguesía, proletariado, etc.) tiene muy escasa utilidad aplicado a la realidad urbana de hoy. La base social histórica de la izquierda (clase obrera industrial) es un grupo minoritario en la gran ciudad, que no tiene casi nunca una clara especificidad urbana y que manifiesta incluso intereses heterogéneos. La posición de los ciudadanos en la ciudad no se deduce únicamente de su lugar en el trabajo, ya que se da una gran diversidad de situaciones laborales como urbanas, sin que exista una clara correspondencia entre ellas. Por lo demás, hay que tener en cuenta otros factores que inciden mucho en la posición urbana de cada uno: la edad, el sexo, la inmigración, la especificidad de determinados tipos de habitar (cascos antiguos, nuevos polígonos, etc.).

El marxismo urbano debe encontrar su base social y para esto debe, necesariamente, orientar su análisis hacia los actores sociales y sus propuestas hacia objetivos unificantes.

El desarrollo de una sociología urbana de corte marxista desde mediados los años sesenta, una vez superados, aunque no del todo, las tentaciones estructuralistas-mecanicistas (en los análisis de política urbana) e historicistas-mesiánicas (en los estudios sobre movimientos sociales) ha tenido el gran mérito de poner el acento en los actores sociales: planificadores, poderes locales, constructores y promotores, propietarios del suelo y financieros, agentes industriales y terciarios, intelectuales, organizaciones y movimientos sociales, inquilinos, ocupantes y usuarios, etc. Solamente el descubrimiento y análisis de los actores sociales permite individualizar la especificidad de lo urbano y reconstruir proyectos históricos con sujeto social real.

Por otra parte, la izquierda ha generalizado su experiencia municipal y ha ido abandonando la doble conciencia (o la mala conciencia reformista) sobre la gestión desde los poderes locales. Por el contrario, se ha ido admitiendo que éstos juegan un papel fundamental en el proceso de transformación del Estado y del sistema socio-económico en un sentido democrático e igualitario y que, asimismo, pueden ser un instrumento unificante de un conjunto de grupos y actores urbanos para construir una base social mayoritaria.

El impacto de la crisis económica sobre la ciudad (paro y marginación, no integración social de la juventud, acentuación de los cooperativismos, etc.) y la relativa inoperancia de los instrumentos municipales y urbanísticos tradicionales (crisis financiera de los poderes locales, obsolescencia del urbanismo de crecimiento) ha obligado a la izquierda a replantearse sus objetivos urbanos y sus propuestas municipales. Entre el riesgo de apoyarse sobre mayorías gremializadas, qualunquistas y atomizadas o en minorías radicales o marginales debe encontrar respuestas que sean soluciones viables, objetivos movilizadores y proyectos unificantes. El reto actual del marxismo urbano es el de contribuir, teórica y prácticamente, a esta tarea. A continuación expondremos sucintamente tres líneas de reflexión y de actuación que tienen todas en

común el poner el acento en la participación activa, constructiva, de los actores sociales, y que intentan superar las poco útiles dicotomías sector público-sector privado, crecimiento-estancamiento, democracia representativa o institucional-organizaciones de base o movilización social, trabajo productivo-ocio, etc. Nos referimos al nuevo urbanismo (de la austeridad o de la crisis), la descentralización municipal en las grandes ciudades y la economía social o la cooperación.

6. Los movimientos urbanos

La perspectiva marxista sitúa en primer plano de su análisis el carácter contradictorio del proceso de desarrollo económico-social y la conflictividad consiguiente a que da lugar (de clases o grupos, cultural o ideológica, política). El marxismo urbano, a pesar de las intuiciones del mismo Marx, ya hemos visto que ha ido construyendo de forma muy lenta y laboriosa las bases de un análisis dialéctico de la ciudad como estructura social y de la política urbana que en ella se produce. Así mismo ha costado mucho integrar los conflictos urbanos (objeto de un análisis histórico descriptivo) en el marco teórico del estudio de la estructura y de la política urbana. A partir de los años sesenta, especialmente a partir de los trabajos de M. Castells, se da este caso. Se construye un aparato conceptual que permite analizar la conflictividad urbana y ponerla en relación con el estudio global de los procesos estructurales y políticos que caracterizan la urbanización.

Sin pretender repetir ahora propuestas teóricas que ya han sido expuestas, conviene destacar tres aspectos que nos parecen fundamentales en este descubrimiento empírico o construcción teórica de la conflictividad urbana.

En primer lugar, la gran *complejidad de la conflictividad urbana* en la que intervienen una gran diversidad de grupos sociales, prácticamente todos, y también una gran diversidad de dimensiones sobre el uso del suelo, la vivienda, los equipamientos y servicios; sobre la imposición local y la distribución del gasto público; sobre los poderes locales, su organización y sus relaciones con el resto del Estado; sobre las actividades económicas que se dan en la ciudad y su regulación y desarrollo; sobre la seguridad, el orden y la protección de los ciudadanos; sobre la imagen, los valores y las relaciones sociales que debe expresar y posibilitar el medio urbano, etc. Es decir, la conflictividad urbana recubre un conjunto de campos mucho más amplio que el diseñado por la oposición capital-trabajo en la producción, por lo cual no parece adecuado trasladar aquí la matriz marxista usual.

En segundo lugar, el *planteamiento* de la conflictividad urbana da lugar a que se sitúe en primer plano el análisis de los protagonistas de estos conflictos y de la política urbana en general, es decir, a los *actores urbanos*. Y este punto de vista ha demostrado (desde "El 18 Brumario de Luis Napoleón" de Marx) una gran pertinencia metodológica, puesto que permite combinar el estudio empírico, el conocimiento impresionista, la descripción inmediata, que es muy importante en el análisis urbano, con la comprensión de los proce-

sos y contradicciones estructurales y todo ello situado en una perspectiva histórica, o por lo menos dinámica. La consideración de los actores sociales urbanos ha permitido descubrir la especificidad de ciertos grupos en su dimensión urbana (por ejemplo, pequeña burguesía industrial o comercial y trabajadores autónomos, o categorías burocráticas o antiguos grupos dominantes que ocupan el poder local o, en ciertos casos, intelectuales y profesionales, etc.) y la relativa autonomía y a veces su carácter contradictorio con otros niveles del Estado de los poderes locales, así como la original confrontación social que muchas veces se da en torno a los planes y actuaciones urbanísticas (que, por ejemplo, en unos casos unen a un gran abanico de clases trabajadoras y medias y en otros las fragmentan considerablemente).

Y en tercer lugar, y sobre todo, hay que destacar el "descubrimiento" de un fenómeno social que si bien no es nuevo no había tenido casi nunca la importancia que ha adquirido en los últimos veinte años: la eclosión y desarrollo de múltiples movimientos sociales en la ciudad, muchas veces heterogéneos y poco organizados, pero que han generado asimismo una movilización urbana o ciudadana global apoyada y representada por una red asociativa que constituye el esqueleto organizado, la garantía de continuidad y el medio más idóneo para su coordinación y generalidad.

Conviene precisar qué entendemos aquí por movimientos urbanos para no caer en una generalización excesiva. Entendemos, de forma restrictiva, por movimientos urbanos aquellas acciones colectivas, casi siempre de las clases trabajadoras o populares, es decir, de los grupos más sacrificados por el desarrollo urbano y no suficientemente tenidos en cuenta por la política de equipamientos y servicios, en defensa y para mejorar sus condiciones de vida en la ciudad y sus derechos políticos locales.

Queremos destacar dos componentes principales de los movimientos urbanos:

a) Los movimientos urbanos se han desarrollado como oposición a determinadas *políticas urbanas* (urbanismo de grandes obras que rompen tejido urbano, de abandono de barrios degradados o periféricos, de vivienda cara, de no control de la calidad de los bienes de consumo, etc.) y, complementariamente, de exigencia de *salario social* o de que la Administración Pública garantice un nivel adecuado de satisfacción del consumo colectivo. Por una parte, han cuestionado el urbanismo desarrollista y la utilización lucrativa y especulativa de la ciudad y por otra, han reivindicado la ciudad no únicamente como conjunto de bienes y servicios necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, sino también como marco y medio de una vida social que se quiere más igualitaria y convivencial.

b) Los movimientos urbanos han puesto de relieve la voluntad de un conjunto de grupos sociales, dependientes, subalternos o marginados de la política ciudadana, de convertirse en sujetos políticos. Lo que han conseguido, sobre todo, cuando han logrado construir una estructura estable de organizaciones ciudadanas o vecinales. Este

nuevo actor (actores) de la política urbana y municipal ha cambiado las condiciones en que se desarrolla aquélla, por cuanto los actores tradicionales (públicos y privados) se han debido confrontar con un interlocutor(es) que muchas veces, por la amplitud de su base social y por la legitimidad de sus objetivos, consigue imponer sus puntos de vista. Hay que tener en cuenta que los movimientos ciudadanos, en sus momentos álgidos, consiguen unificar a un conjunto de clases trabajadoras y medias ampliamente mayoritario. El movimiento urbano o ciudadano no puede confundirse en ningún caso con el movimiento obrero sindical, aunque a veces sus reivindicaciones sean similares y sus integrantes sean en parte los mismos: sus proyectos políticos y sociales no son idénticos, pues se mueven en otras dimensiones del Estado y de la economía. Dos objetivos característicos de los movimientos urbanos son suficientemente demográficos de su especificidad, uno político y otro económico. El político: la descentralización del Estado, el reforzamiento de los poderes locales, la participación ciudadana. El económico: la reivindicación de un modelo no productivista, la calidad de la vida, el salario indirecto.

No parece, aunque se hayan hecho propuestas teórico-políticas en este sentido, que los movimientos urbanos sean la base para la construcción de un *proyecto mesiánico* como ha ocurrido con el movimiento obrero. La base social en que se apoyan es heterogénea y precaria y sus objetivos son diversos, discontinuos y a veces contradictorios. Los movimientos urbanos no han construido una alternativa global de ciudad y de poder local (lo cual depende mucho de cada contexto y de la coyuntura política y económica) y por lo tanto difícilmente pueden considerarse portadores de una alternativa revolucionaria o de cambio global. Pero sí que han introducido o reforzado nuevas y más democráticas concepciones en urbanismo y política municipal. Como veremos en los puntos siguientes las grandes cuestiones que debe abordar hoy la política urbana y municipal como son la crisis del *welfare state* (déficit público y nuevas necesidades), la burocratización de la Administración pública local y la necesidad de superar el urbanismo desarrollista del pasado requieren siempre un alto nivel de movilización y participación ciudadanas. Es así como entendemos el nuevo urbanismo, la cooperación social y la descentralización municipal.

7. El nuevo urbanismo

La crisis económica, con sus aspectos de caída de la inversión productiva, cierre de industrias, aumento del precio de la energía, paro, freno del crecimiento urbano y de la inmigración, etc. se ha encontrado con un modelo de organización territorial (concentrado, metropolitano, migratorio) que ya estaba en crisis, tanto por las crecientes desecuencias y despilfarros de la concentración y del gigantismo urbanos, como por la fuerza de las reivindicaciones sociales sobre la calidad de la vida urbana. La crítica marxista al urbanismo desarrollista puso primero el acento en la falta o debilidad

del planeamiento, dominado por la lógica de la renta urbana, y en los altos costes sociales, expresados por los déficits de viviendas, equipamientos y servicios. Posteriormente, y ya en el marco de la crisis económica, la crítica del marxismo urbano moderno pone de relieve:

a) *El despilfarro*: La imposibilidad de mantener un modelo territorial basado en el despilfarro de energía, agua, suelo, aire... La crisis económica y el aumento considerable del precio de la energía, las dificultades cada vez mayores y el encarecimiento del abastecimiento de agua en las grandes ciudades, la peligrosidad de los niveles de contaminación alcanzados, el deterioro de la naturaleza (bosques, ríos, etc.) y la destrucción o abandono de terrenos idóneos para la agricultura, que la expectativa especulativa o la afectación por proyectos de obras públicas inutiliza, son todos ellos fenómenos que dan lugar a una situación cada día más insostenible. El despilfarro mayor es seguramente el de suelo y el derivado del coste de las infraestructuras, como resultado del modelo de crecimiento regido por la lógica de la renta absoluta y por la necesidad de grandes infraestructuras, cuya realización a posteriori o adaptadas a las necesidades de grandes aglomeraciones significa la multiplicación de costes. Se destruye también el patrimonio construido, tanto de las zonas de emigración como de las ciudades en crecimiento: se impone el valor de cambio al valor de uso y se da prioridad a la construcción periférica y no a la rehabilitación y reutilización del parque existente. Contra el urbanismo del despilfarro se opone el urbanismo de la austeridad, de la calidad, de la igualdad social y territorial.

La crítica al despilfarro del modelo de desarrollo urbano que prevalece entre 1950-1975 no es una crítica moralizante que se hace en nombre de una alternativa ideal. Es una crítica económica, tecnológica, social, cultura y política que se aplica tanto al despilfarro como a los otros aspectos que citaremos más adelante.

Económica, porque este modelo de ciudad acaba no pudiendo funcionar según su misma lógica; las deseconomías de aglomeración son superiores a las economías. En bastantes casos su crecimiento queda colapsado antes de 1975, antes de la crisis. *Tecnológica*, porque las nuevas técnicas de transportes y comunicaciones, la necesidad de ahorrar energía o de potenciar las energías blandas, la optimización de los ámbitos de gestión sobre la base de unidades intermedias, la crítica a la escasa rentabilidad de grandes infraestructuras (por ejemplo, autopistas urbanas), etc., lleva hoy a considerar pasados de moda los proyectos que se consideraban tecnológicamente superavanzados hace diez años. Es una crítica *social*, que se apoya en fuertes movimientos sociales urbanos, porque el modelo de desarrollo urbano ha acentuado la desigualdad, tanto entre la ciudad y su periferia metropolitana, como dentro de la ciudad entre barrios degradados y caóticos y barrios con estándares ciudadanos y también entre grupos sociales (niños y jóvenes, tercera edad, población inmigrada, víctimas de la ciudad moderna).

Y es una crítica *cultural y política* porque se hace

en nombre de otros valores (de la calidad de la vida, de la igualdad urbana, del intercambio social, de la austeridad, etc.) y proponiendo alternativas de gobierno viables (mayorías políticas de izquierda, descentralización, participación popular, diálogo con las organizaciones sociales).

En esta crítica creemos que hay que destacar dos hechos significativos. En primer lugar que el pensamiento político y teórico de base marxista acepta hasta una época muy reciente el axioma de la bondad del crecimiento y critica fundamentalmente la insuficiencia de la acción pública y la desigualdad social de los efectos de la política urbana en la producción de esta crítica. Y antes de que lo hicieran técnicos, intelectuales y políticos los movimientos urbanos denunciaron el despilfarro, lo absurdo del crecimiento cuantitativo y la insatisfacción creciente de las necesidades humanas que provocaba la urbanización metropolitana.

b) *Contra el cuantitativismo y el gigantismo*

La crítica al crecimiento acelerado de las grandes ciudades y el urbanismo megalomaníaco es anterior a la crisis; pero es una crítica minoritaria y poco compartida por la izquierda marxista (que en general identifica progreso social y desarrollo de las fuerzas productivas con concentración urbana y grandes infraestructuras).

Las grandes ciudades de los sesenta-setenta, orientadas al crecimiento, fracasan: las grandes dimensiones no multiplican ni la productividad del sistema económico ni la calidad de la vida urbana. Se cuestiona que sea socialmente útil este crecimiento y se percibe el fracaso del urbanismo que lo acompaña. Por ejemplo: centros direccionales periféricos, grandes polígonos residenciales o autopistas urbanas. La ciudad heredada se deteriora y expone el despilfarro de su abandono, mientras que lo nuevo acaba siendo tan caro como insatisfactorio. Y lo que resulta más paradójico: a pesar del boom de la construcción se mantienen y hasta aumentan los déficits de vivienda y equipamientos. El urbanismo cuantitativo no resuelve tampoco los problemas cuantitativos.

La crisis de los setenta acaba con este urbanismo. Se frena el crecimiento urbano y metropolitano (muchas grandes ciudades pierden incluso población) cuando ya los guarismos millonarios han perdido prestigio. No es posible, ni parece tan necesario como antes, hacer grandes inversiones en infraestructuras y polígonos, que no interesan al capital privado (la ciudad ya no es un gran medio de especulación y acumulación), y que resultan cada vez más inalcanzables para unas haciendas públicas aquejadas por déficits crecientes y que deben dar prioridad a paliar los efectos directos de la crisis (ayuda a las empresas y pensiones a los parados).

La crítica de izquierdas pretende hoy ir más allá del simple coyunturalismo. No acepta que se diga: "no podemos continuar como antes porque ahora hay crisis", sino que afirma: "La crisis de ahora se debe también a la política de antes". El urbanismo basado en la concentración territorial y en las obras gigantescas resulta inviable, porque hace a la ciudad cada vez más invivible y también más improductiva. El nuevo urbanismo deberá proponer

nerse una ciudad basada más en la calidad del entorno y de los servicios urbanos que en el crecimiento y en la reconstrucción de la base productiva de la ciudad, en una época que se va a caracterizar por la informatización de la sociedad.

c) *La fragmentación de la ciudad actual*

Doble fragmentación territorial y social. La doble acción del urbanismo funcionalista y del auge de los neocorporativismos. Los efectos convergentes de la disgregación de las grandes clases sociales y de la generalización de pautas de consumo y de ocupación del ocio individualista.

La ciudad expresa y refuerza la atomización de la vida social: concepción de la vivienda falsamente autosuficiente, urbanismo de bloques y de autopistas que sacrifica el espacio susceptible de apropiación colectiva, equipamientos degradados y de gestión burocrática, prioridad al coche privado y a la huida semanal a un campo utópico, que reproduce los mismos problemas de la ciudad, etc. Frente a una opción urbana, que se apoya evidentemente en fuertes tendencias sociales y culturales, que prioriza las formas individuales y privadas de vivir la ciudad, el nuevo urbanismo propone la reconstrucción de tejidos sociales de base, la solidaridad y el intercambio, la apropiación comunitaria del espacio urbano, la recuperación de la ciudad, la defensa y promoción de las identidades locales (barrios y ciudades y no grandes áreas metropolitanas anónimas y tecnocráticas).

¿El renacimiento de la utopía colectivista? Nada de esto. La crítica a la atomización y la voluntad de reconstruir una vida urbana más comunitaria se han generado en la base misma de las sociedades modernas, han dado lugar a movimientos reivindicativos y a asociaciones ciudadanas y, sobre todo, se han manifestado a través de la generalización de comportamientos urbanos: demanda de plazas y espacios públicos, revalorización de las fiestas y de las tradiciones de barrio, rechazo de las tecnologías y de los modelos urbanísticos que segregan y atomizan, intensa utilización de equipamientos colectivos (deportivos, sociales, culturales, de esparcimiento).

Esa reacción social aparece, además, como coherente en relación a la crisis de la gran ciudad y de los modelos de la sociedad de consumo; es decir, posibilita una salida de la crisis económica y de la civilización actual. Las propuestas del nuevo urbanismo aparecen coherentes con la demanda social y relativamente adecuadas para salir de los *impasses* de la crisis.

d) *La crisis económica y la base productiva de la ciudad*

La crisis económica ha acelerado el proceso de industrialización de las grandes ciudades y, sobre todo, ha provocado la liquidación de muchas pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales que no pueden reconstruirse lejos del medio urbano. El urbanismo del desarrollismo no solamente no creó una infraestructura suficiente para alimentar el crecimiento autosostenido de la ciudad (debido a las crecientes deseconomías de aglomeración y a la insuficiente inversión pública en infraestructura social), sino que se revela poco adaptado al nuevo contexto económico caracterizado

zado por la demanda de calidad del medio urbano, de flexibilidad locacional, de diversificación de actividades y grupos sociales y sobre todo de socialización de la información.

El nuevo urbanismo se plantea el mantenimiento y la recuperación de la actividad industrial y comercial en la ciudad, basado en gran parte en pequeñas y medianas empresas, que no solamente se pueden adecuar casi siempre al medio urbano, sino que, además, tienen unas ventajas que la crisis económica y cultural y la informatización han revalorizado: flexibilidad de adaptación a las demandas, bajos costos generales, etc. La ciudad y el gobierno local deben, sin embargo, ofrecer a estas empresas aquello que no pueden conseguir solas, debido a lo reducido de su tamaño y de su capital: información, asesoramiento, servicios de gestión y financieros comunes, etc. El nuevo urbanismo debe plantearse la recomposición de la base productiva de la ciudad teniendo en cuenta dos elementos nuevos: la informatización de la sociedad y el fin de una vida social dominada totalmente por el trabajo remunerado.

e) *Ciudad, trabajo y vida social*

El urbanismo de hoy, de la crisis, debe plantearse necesariamente los problemas del empleo y del paro, del relanzamiento económico y del salario social.

Como a la crisis económica se añade la crisis financiera del *Welfare State* y, en especial, de las haciendas locales, así como la generalización de las críticas a las rigideces del planeamiento urbano y a la burocratización de la gestión pública, las propuestas neoliberales han conseguido un cierto auge. El marxismo urbano actual rechaza evidentemente estas propuestas, pero no lo hace retomando simplemente las posiciones clásicas de la izquierda, ni las del estatalismo comunista, ni las del keynesianismo. Por dos razones. En primer lugar, porque son de imposible aplicación hoy en el contexto occidental desarrollado. Y, en segundo lugar, porque si bien es cierto que las propuestas neoliberales sólo servirían para agravar la crisis de la ciudad y los déficits de los servicios y equipamientos públicos (abandono del planeamiento, privatización de servicios, etc.) —lo cual haría a la ciudad menos competitiva y más desigual—, en cambio, las críticas sobre la imposibilidad de aumentar indefinidamente el déficit público y la imposición fiscal o sobre la baja productividad económica y escasa rentabilidad social de una gestión local burocratizada, plantean problemas reales.

El nuevo urbanismo se propone una ambiciosa política de mejora de la infraestructura social urbana y de desarrollo de los servicios públicos con un doble objetivo. Primero: mejorar la calidad de la vida urbana y paliar los efectos negativos de la crisis mediante el aumento del salario social. Y, en segundo lugar, quiere, asimismo contribuir a generar, directa e indirectamente, empleo, tanto en la ejecución de obras públicas como en la prestación de servicios.

Pero esta política no puede ser inflacionista, ni aumentar el déficit público ni los impuestos (o no puede hacerlo mucho). Por otra parte, no puede basarse sistemáticamente en la realización de gran-

des obras públicas (por ejemplo, autopistas) ni grandes equipamientos (por ejemplo, hospitales, universidades), que no correspondan muchas veces a las necesidades urbanas actuales. Esta problemática tan compleja no está resuelta, ni mucho menos, pero se apuntan algunas líneas de acción interesantes, como por ejemplo:

— Transferir recursos públicos de los poderes centrales a los locales que tienen mayor capacidad de inversión y de adecuación a las situaciones concretas.

— Acelerar la reforma administrativa y la descentralización o, por lo menos, la desconcentración de las funciones y servicios públicos para aumentar su productividad.

— Elegir proyectos que generen más puestos de trabajo y que no requieren grandes inversiones iniciales (por ejemplo: arreglar calles y desarrollar la trama viaria, tipo ensanche, en vez de autopistas urbanas).

— Impulsar iniciativas de equipamientos y servicios públicos que, con costes relativamente bajos, aumenten el salario social y creen puestos de trabajo. Por ejemplo: colonias de vacaciones y campos de trabajo para niños y jóvenes, equipamientos deportivos y sociales en los barrios, asistencia domiciliaria a los ancianos, etc.

— Estimular la participación y la cooperación sociales tanto para conocer y cubrir mejor las necesidades como para reforzar la acción pública con la colaboración ciudadana (por ejemplo: la rehabilitación urbana, asistencia a grupos específicos como jóvenes o tercera edad, etc.).

La política urbana se propone, entonces, no únicamente mejorar la calidad de la vida urbana y combatir las desigualdades mediante el salario social, sino también contribuir al relanzamiento de la actividad económica y a la creación de puestos de trabajo. Y también, y sobre todo, se trata de crear roles sociales y de distribuir responsabilidades para contrarrestar la marginación de aquéllos que no tienen, ni van a tener, empleo en la economía convencional.

8. Objetivos e instrumentos del nuevo urbanismo

El nuevo urbanismo asume la crítica, a la vez, de los objetivos y de los instrumentos del urbanismo basado en el crecimiento y en el planeamiento finalista.

¿Qué objetivos se propone este nuevo urbanismo? Resumimos:

En primer lugar: el trabajo. No tanto por la vía keynesiana tradicional de las grandes obras públicas, sino sobre todo:

— Manteniendo y desarrollando las actividades industriales y comerciales basadas en la pequeña y mediana empresa e integradas en el tejido urbano.

— Multiplicando las obras públicas (en especial medianas y pequeñas) y aumentando considerablemente los equipamientos y servicios sociales.

— Mejorando la eficacia de las ciudades como base de la producción, mediante inversiones selectivas en infraestructuras y actividades motoras y sobre todo haciendo de la ciudad un centro de

información y de coordinación del mayor número posible de actividades.

— Creando y ampliando nuevos roles sociales ligados a la gestión municipal y a la economía social que sustituyan parcialmente el trabajo asalariado tradicional.

La industria no va a desaparecer de las ciudades, pero tampoco va a generar nuevos lugares de trabajo. El terciario moderno o cuaternario de los años sesenta (administración pública y privada, sobre todo) está en vías aceleradas de informatización y ya no es "lo moderno". El urbanismo de hoy debe contribuir a organizar una ciudad que proporcione una gran diversidad de actividades, funciones y empleos que no se reduzcan únicamente al trabajo que proporciona el capital privado que busca el lucro o a la inflación de la burocracia pública.

Esto nos lleva al segundo objetivo: el nuevo urbanismo da prioridad a la ciudad como lugar de vida de todos y para todos, quiere combatir la desigualdad social y no persigue ya el crecimiento a toda costa. Esto significa, entre otras cosas: rehabilitar y recuperar la ciudad construida; mejorar y aumentar los espacios y equipamientos de uso público; hacer la ciudad realmente accesible a todos los grupos (jóvenes, niños, tercera edad, amas de casa, inmigrados, etc.); recalificar y equipar los barrios periféricos y degradados y dotarlos de funciones centrales; integrar la agricultura, los parques forestales, el litoral, los cursos fluviales y en general las zonas no edificadas de la ciudad y su entorno inmediato en la vida urbana; la protección y la reforma del medio ambiente; la recuperación del patrimonio histórico-cultural, etc.

El nuevo urbanismo se propone, por lo tanto, dar prioridad a la calidad de la vida y superar las desigualdades sociales heredadas, dos temas clásicos de la izquierda, pero que hasta ahora se habían ligado al crecimiento.

En tercer lugar, el nuevo urbanismo se propone hacer ciudad, urbanizar el territorio, pero es crítico respecto al planeamiento de las áreas metropolitanas de la época del desarrollismo. La crisis económica y el frenazo de la concentración urbana elimina urgencias de planeamiento y relativiza las concepciones metropolitanas. El objetivo que se propone el nuevo urbanismo no es tanto el de planificar el crecimiento de las áreas metropolitanas, sino la urbanización del territorio regional y nacional, tendiendo a la igualación de las rentas reales; es decir, llevar o hacer accesibles los equipamientos y las libertades urbanas a las zonas rurales y a las ciudades pequeñas. Esto supone una política que refuerce el conjunto del sistema urbano, especialmente las comunicaciones y la diversidad de equipamientos y actividades de las ciudades grandes y medianas. No se trata de reivindicar un equilibrio territorial romántico y matemático, sino de optimizar socialmente el uso del territorio, lo cual hace conveniente evitar grandes desequilibrios y fuertes especializaciones.

El actual contexto urbanístico se caracteriza por la existencia de algunos comportamientos sociales nuevos que condicionan las propuestas de la

izquierda, y que influyen, asimismo, en los movimientos urbanos. Nos referimos a:

a) La renta urbana absoluta ya no rige como antes la lógica del desarrollo de la ciudad (el fin del crecimiento acelerado y en todas direcciones). Pero ahora priva la renta diferencial (las actuaciones singulares y muy selectivas) y si no, se espera la iniciativa pública.

b) La defensa de la ciudad, como valor de uso que caracteriza en estos momentos a las actitudes sociales y culturales más generalizadas, se confunde a veces con el “passeísmo” (defensa a ultranza del pasado, de lo existente simplemente porque existe) y sobre todo con el “corporativismo” urbano (defensa insolidaria de los intereses del pequeño grupo social o territorial).

c) Las ideologías urbanísticas y arquitectónicas vigentes son muy críticas respecto a las concepciones funcionalistas y uniformistas del desarrollismo y reivindican la belleza y la individualidad de la “obra de arte”. El peligro actual es el de un nuevo tecnocratismo o despotismo estético y de un nuevo uniformismo, consecuencia de las modas artísticas e intelectuales del momento, además del menosprecio por la utilidad social de la actuación urbanística.

d) La pérdida de muchas actividades industriales y comerciales en las áreas urbanas, por los efectos sucesivos del urbanismo desarrollista y por la crisis económica, es en parte irreversible. Las funciones industriales, administrativas y comerciales se han descontextualizado bastante en relación al medio urbano y se ha ido generando un hábito social de prescindir de la actividad productiva en la ciudad, como si la ciudad pudiera ser solamente una combinación de funcionarios y consumidores.

e) La crisis económica ha agudizado o hecho aparecer un conjunto de problemas sociales que, si bien, en gran parte, no están acusados por la vida urbana ni pueden resolverse a través de la política urbana, se manifiestan en la ciudad y deben encontrar respuesta en ella. Son problemas como el paro, la marginación de la juventud, la drogadicción, la corrupción, el abandono de la tercera edad, la insolidaridad, el individualismo generalizado, etcétera.

Todas estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta por el nuevo urbanismo que, por su parte, puede apoyarse en unas bases políticas y en unas tendencias sociales favorables, como son:

a) La importancia creciente de las Administraciones Locales que son consideradas, tanto por la mayoría de fuerzas políticas y culturales como por la opinión pública en general, más capaces que los poderes centrales de responder a muchos de los problemas de hoy (mayor proximidad a las situaciones concretas y a la población, más capacidad de inversión y de obtener la cooperación social, combinación de flexibilidad y de globalidad en sus actuaciones, etc.). Ocurre que los poderes locales son más receptivos a las corrientes políticas e intelectuales más avanzadas y, además, les compete legal y prácticamente tanto la actividad urbanística como gran parte de las prestaciones personales públicas.

b) El desarrollo y la legitimidad alcanzadas por

los *movimientos urbanos* es uno de los hechos claves para entender la cuestión urbana hoy y para analizar sus perspectivas. Entre otros méritos, movimientos y asociaciones plantearon la crítica al urbanismo desarrollista y la exigencia de calidad de vida en la ciudad antes de que lo hicieran los políticos, profesionales o administradores. Y, como además de tener razón, hay que tener fuerza para pesar en la vida social, la construyeron: el tejido asociativo ciudadano es hoy un interlocutor o un *partenaire* que todos deben tener en cuenta. Es evidente que no siempre expone posiciones avanzadas y globales, pero sí que defiende intereses legítimos y colectivos, y desde planteamientos en general realistas y solidarios (aunque no siempre). El nuevo urbanismo, en el que han culminado las tendencias más modernas del marxismo, proviene en gran parte de los movimientos urbanos o, dicho en clave marxista convencional, los movimientos urbanos y ciudadanos son el sujeto social por excelencia del nuevo urbanismo.

c) El renacimiento del municipalismo y el desarrollo de los movimientos urbanos, junto con la crítica cultural que se ha hecho en los medios técnicos e intelectuales al urbanismo del pasado, ha consolidado unos *valores urbanísticos* que actualmente aparecen como los más legítimos: la ciudad y el barrio como lugares de convivencia, la prioridad a los equipamientos y servicios colectivos, la defensa de un urbanismo global e integrado y no funcionalista y sectorializado, el derecho a la participación popular en todo el proceso de la actuación urbanística, etc. Estos valores, a su vez, actúan de legitimadores de muchas de las propuestas del nuevo urbanismo de izquierdas.

d) Y por último hay que citar la revalorización de las *tecnologías intermedias*, de las energías blandas, de lo pequeño (“*small is beautiful*”), de los oficios y del trabajo artesano, de la cooperación social y del trabajo benévolos, etc. Esta revalorización no significa necesariamente una vana tentativa de retorno al pasado, sino que puede combinarse con el aprovechamiento de las técnicas más avanzadas, la informática sobre todo. Todo lo cual ofrece a la ciudad una nueva oportunidad de despegue, una salida positiva a la crisis actual, tanto en el terreno de la producción como en la prestación de servicios.

Por todo lo dicho hasta ahora, resulta evidente que el urbanismo se enfrenta con una realidad muy distinta al pasado, cambiante y contradictoria. Y el urbanismo de hoy debe plantearse, además, objetivos nuevos y diversificados. Los *instrumentos urbanísticos* heredados ¿resultan hoy adecuados?

La crítica al urbanismo del pasado no se circunscribe a sus contenidos, objetivos y resultados, sino también a sus instrumentos y a sus métodos.

Las nuevas corrientes urbanísticas de izquierda no centran exclusivamente su crítica en la falta de planeamiento, en la insuficiencia de recursos públicos o en el olvido de los costes sociales que paga la población más necesitada (cuestiones que continúan siendo fundamentales), sino que critica el carácter mismo de los planes de urbanismo, su método de elaboración y su forma de aplicación.

Esta crítica al planeamiento urbano puede resumirse en cinco puntos:

a) Carácter rígido, finalista, autoritario del plan general que, o bien representa una coacción paralizante para la sociedad o bien impone unas obligaciones de imposible cumplimiento a la Administración. El resultado es que el plan es progresivamente desnaturalizado en su aplicación práctica y por lo tanto se devalúa. La crítica actual del planeamiento corre el peligro de "echar al niño con el agua sucia".

b) La no participación real de los distintos grupos sociales en el planeamiento, tanto por la insuficiencia de los mecanismos hasta hoy utilizados (información pública, alegaciones) como por la separación en los planeamientos y actuación urbanística.

c) El nuevo urbanismo critica, en consecuencia, la separación artificiosa entre el momento del planeamiento y las fases posteriores de la actividad urbanística pública: gestión, ejecución, control y disciplina, etc., y propone su integración mediante un urbanismo de objetivos que articule una acción pública continuada con la iniciativa de los actores sociales particulares.

d) El planeamiento urbano tradicional deja casi siempre fuera de su ámbito la regulación concreta de las actividades económicas (por ejemplo: planes de usos industriales o comerciales) y la defensa activa del medio ambiente, dos cuestiones hoy consideradas de primerísima importancia.

e) El planeamiento, precisamente porque no va ligado con la posterior actuación urbanística, no garantiza la ejecución de las obras de infraestructura y de urbanización, de construcción o rehabilitación de viviendas, de realización de equipamientos colectivos, sobre todo en los barrios deficitarios o para los grupos sociales de menores ingresos. Es decir, el planeamiento urbano, aunque se lo proponga en sus objetivos explícitos, no sirve casi nunca para combatir la desigualdad social sino para consolidarla. Hoy el planeamiento debe ser programático, es decir, que una un documento de objetivos generales con un conjunto de programas de inversiones localizadas y jerarquizadas.

En resumen, el nuevo urbanismo propone un planeamiento abierto, de objetivos, pero no rígido ni finalista. Un planeamiento procesual y programático, articulado con la gestión y la disciplina urbanísticas que integre la ordenación de los usos productivos y comerciales y la salvaguarda efectiva del medio ambiente. Y, por último, se propone un urbanismo participativo y descentralizado, elaborado desde las unidades político-administrativas más próximas a los ciudadanos (por ejemplo: los distritos de las grandes ciudades deberán elaborar el planeamiento parcial y especial) y que instrumente mecanismos que estimulen la cooperación social (por ejemplo, sociedades de asesoramiento y colaboración con promociones de rehabilitación de iniciativa privada).

9. La cooperación social

La gran mayoría de los marxistas consideraba una utopía reaccionaria al cooperativismo, por no hablar del trabajo benévolos. Incluso la autogestión

ha sido hasta una época reciente un concepto más que sospechoso. Y en cuanto a la colaboración o la iniciativa popular para resolver los problemas de urbanismo, vivienda o servicios ha sido una actitud considerada muy peligrosa, desde casi toda la izquierda, en la medida que trasladaba a los ciudadanos, a los trabajadores, una responsabilidad fundamental de la Administración Pública.

Pero hoy se manifiesta un acuerdo general en diagnosticar la crisis del Estado del bienestar, del "welfare state". Crisis en una doble dimensión:

— Crisis financiera. El creciente déficit público alimenta la inflación y alcanza cotas insoportables. Además, el gasto público social se ha ido orientando cada vez más a paliar directamente los efectos de la crisis (paro, cierre de empresas). Si bien parece posible mediante la reforma administrativa y especialmente la descentralización mejorar las prestaciones sociales, así como racionalizar la recaudación fiscal y aumentar los ingresos públicos, no hay que olvidar la fuerte tendencia al aumento de las demandas sociales y los límites que la crisis económica impone al aumento indefinido de la imposición sobre las rentas y los beneficios particulares. En este contexto se producen fuertes presiones en favor de la privatización de los servicios públicos y se manifiestan tendencias a la rebelión fiscal.

— Crisis burocrática. La seguridad social y muchos servicios públicos al desarrollarse se han centralizado y burocratizado enormemente. Se han alejado del usuario y también se han distanciado del control político democrático. El resultado ha sido la degradación de las prestaciones o su inadecuación a las necesidades concretas, por una parte, y la multiplicación de los fenómenos de despilfarro, clientelismo y corruptelas. Los aparatos gigantescos y burocráticos resultan a veces tan caros (económicamente) como ineficientes (socialmente), pero han adquirido una gran fuerza política.

Esta situación resulta hoy insostenible. No es posible ni deseable aumentar mucho más el déficit público ni tampoco dejar de mejorar las prestaciones sociales. No es posible tampoco continuar desarrollando burocráticamente los servicios públicos, pero sería catastrófico, desde el punto de vista de la justicia social y de la convivencia democrática, entrar en la vía de su privatización. Esta madeja de contradicciones, aparentemente insolubles, no tiene una solución única. Se ha propuesto aumentar más el gasto público y las prestaciones de la seguridad social, pero cada vez es menos posible y también menos igualitario. Se propone, asimismo, recurrir al mercado, por lo menos cuando no se trata de cubrir mínimos vitales. Y también el recurso a una *cooperación social* creciente, el desarrollo de la llamada "economía social" es un componente básico del pensamiento de una parte importante de la izquierda urbana.

¿Pero qué se entiende exactamente por cooperación y por economía sociales en relación a la política urbana y a los servicios que prestan los poderes locales?

Por *cooperación* entendemos la participación constructiva ("productiva" en sentido amplio) de

los interesados o de los usuarios, de los ciudadanos en general, en la elaboración, gestión y ejecución de la política urbana y social. Esta participación puede llegar hasta prácticamente a la sustitución de la intervención del ente público o puede limitarse a una colaboración benéfica mínima (por ejemplo informar o recibir información, cumplir sin coacción la reglamentación, etc.). Entre ambos casos las posibilidades son infinitas.

Con el término de *economía social* designamos al sector (asociaciones, cooperativas, mutuas, fundaciones, centros de estudios, etc.) que sirve normalmente para instrumentar la cooperación social, aunque ésta no sea su única finalidad. En general, se entiende por economía social el sector que no es jurídicamente público (aunque muchas veces actúe en el mismo campo y con objetivos parecidos), pero que tampoco persigue una finalidad lucrativa, de remuneración del capital invertido, como ocurre con el sector privado (aunque lo sea jurídicamente). No viene al caso la enumeración de todas las características y posibilidades de la economía social (lo que ya hicimos en un artículo reciente en el CEUMT nº 50). Pero queremos llamar la atención sobre algunos aspectos de la cooperación y de la economía sociales que se relacionan directamente con la política urbana y municipal.

a) El recurso al *cooperativismo* vuelve a ser un medio importante para satisfacer las necesidades de vivienda y servicios en las ciudades. Los Ayuntamientos les dan un apoyo creciente, estimulan su creación y buscan su colaboración: operaciones de rehabilitación urbana y de viviendas sociales; construcción y gestión de guarderías, escuelas, residencias o centros para la tercera edad, etc. Pero la cooperativa entra también en otros campos de la colaboración entre ciudadanía y Ayuntamientos: cooperativas de construcción para realizar obras públicas o construcción de viviendas, cooperativas de artesanos, de comerciantes, de consumidores, de profesionales, de promoción de actividades culturales, etc. En estos casos se puede contribuir a resolver dos problemas distintos a la vez: cubrir una necesidad (o hacerlo mejor) y proporcionar trabajo, y al mismo tiempo no aumentar (o relativamente poco) el gasto público y la burocracia municipal.

b) La colaboración Ayuntamientos-*asociaciones y movimientos sociales* empieza a ser importante y puede serlo mucho más. En algunos casos se instrumenta mediante cooperativas, en otros por la participación de las asociaciones en la actividad de los entes públicos locales, sobre todo si están descentralizados (Consejos de Distrito, Centros Cívicos, etc.). Los casos pueden ser tantos como sectores puedan distinguirse en la actividad municipal y en los de las asociaciones y movimientos. Por ejemplo: gestión de equipamientos culturales, deportivos u otros; colaboración en la prestación de determinados servicios (para los jóvenes o la tercera edad, de defensa del consumidor, de protección ciudadana, etc.); organización de fiestas o actos colectivos; etc.

c) Una forma tradicional de cooperación social es la que se establece entre Ayuntamientos y *cajas de ahorro, mutuas* y entidades similares. Es obvio

que actualmente reviste gran importancia, vista la gran insuficiencia financiera de los entes locales, que pueden ser tanto receptores de créditos como avaladores para terceros (otros sectores de la economía social) u orientadores de las prestaciones sociales que realicen las cajas de ahorro.

d) Un campo relativamente nuevo es el de la colaboración entre administraciones locales y *centros de estudios, de investigación o de promoción cultural*, formados por técnicos y profesionales. Se trata en este caso de aprovechar y generalizar la actividad de grupos surgidos de la iniciativa privada, pero que en general no persiguen una finalidad lucrativa, sino intelectual, pedagógica o socio-política. Muchas veces estos grupos representan un apoyo ágil, eficaz y poco costoso para la acción de un Ayuntamiento progresista.

e) En todos estos campos que acabamos de citar, y en muchos otros, el *trabajo benéfico* puede ser de gran importancia y, en el contexto de la crisis económica, parece destinado a desarrollarse, y más si recibe el apoyo público y la correspondiente valorización social. Desde la colaboración ciudadana en campañas municipales (de limpieza, protección civil, recuperación del patrimonio histórico-cultural, acción hacia grupos marginados, etc.) hasta la multiplicación de las relaciones de solidaridad entre vecinos y ciudadanos en general.

De esta colaboración entre entes locales y sectores de la economía social merecen destacarse algunas cuestiones:

a) La necesidad de que las empresas de la economía social sean *competitivas* y no marginales, sobre todo cuando actúan en campos en los que también interviene la empresa privada lucrativa. Esta existencia de competitividad no es fácil de cumplir en muchas ocasiones, tanto por el carácter improvisado y amateur de cooperativas y asociaciones, de su falta de capital inicial y de experiencia de gestión, etc., como por la ilusión de mantener en su seno relaciones laborales más libres, el rechazo de la jerarquía y de la división del trabajo en ciertos casos, etc.

b) Se plantea así mismo el delicado problema del *apoyo* que deben dar los entes locales a las empresas y organizaciones de la economía social. Es evidente, por una parte, que merecen un apoyo decidido cuando actúan en sectores en los que no entran en competencia con las otras empresas. Así mismo, y en la medida que contribuyen a disminuir el paro y a cubrir necesidades colectivas, es lógico que reciban ciertos estímulos y ayudas: formación de gestores, exenciones fiscales en algunos casos, créditos y avales para su puesta en marcha y la constitución de una base tecnológica mínima, asesoramiento técnico y legal, etc. Y también parece lógico que los contratos y concesiones municipales se hagan de tal forma que no excluyan de entrada a las empresas de la economía social. Pero el problema, que no es fácil resolver, se plantea cuando la ayuda a estas empresas puede entenderse que perjudica a las otras, las "capitalistas" o lucrativas, que pueden considerar con razón que son víctimas de una competencia desigual.

c) *El derecho contractual.* La multiplicación y el desarrollo de las organizaciones sociales, a

medida que cada grupo actúa colectivamente en función de sus intereses en el marco del Estado democrático, está produciendo un nuevo tipo de derecho, el *derecho contractual*, que es un derecho producto de acuerdos entre actores colectivos pero de naturaleza privada y que tiene una relativa eficacia general garantizada por los poderes públicos. Algunas de las actividades de las organizaciones sociales dan lugar a empresas o sociedades típicas de la economía social (una mutua de un comité de empresa, una cooperativa de una asociación de vecinos, etc.), pero, en la mayoría de los casos, las actividades de este sector deben evaluarse a través de indicadores muy insuficientes: personas empleadas (muy pocas en relación al volumen de actividad), personas asociadas (en este caso, el indicador es excesivo), presupuesto anual, evaluación de las actividades que signifiquen la prestación de un servicio social, etc.

d) *Economía social y lucha de clases*. ¿El desarrollo de la Economía Social no será una forma de liquidar la lucha de clases sin alcanzar una sociedad socialista? Una pregunta y una eventual polémica sin interés alguno con la misma argumentación uno se hubiera podido oponer a la existencia de un fuerte sector público, de la Seguridad Social y de la planificación económica.

Evidentemente, la Economía social modifica el campo del conflicto social y en ciertos casos puede atenuar la confrontación entre grandes agregados (clases-partidos) en beneficio de las organizaciones intermedias y de la negociación. Pero es que hoy asistimos no a esta confrontación entre grandes sujetos históricos, sino a un proceso de desagregación de la sociedad y de la creciente abstracción del Estado. La escasa visibilidad del Estado provoca una reacción social de desresponsabilización (por ejemplo oposición a los impuestos, pérdida del sentimiento de solidaridad). Por esto el desarrollo de la Economía Social y de la sociabilidad en general significa reconstruir un tejido social en el que conflictos y negociaciones adquieren un carácter más colectivo y que permite acercar sociedad civil y un Estado hecho más visible, más Estado-ordenamiento y menos Estado-persona.

La crisis económica y la crisis del Estado del bienestar no ha agudizado la lucha de clases. Más bien ha parecido que, excepto aquellos sectores cuya posición corporativa les proporcionaba una indudable capacidad de negociación y por lo tanto de lucha, la desconfianza y el desinterés hacia el Estado ha orientado a los grupos afectados hacia salidas de supervivencia más que hacia la reivindicación frente al Estado. Esta reivindicación se ha desarrollado en cambio en otros campos que no son los tradicionales del conflicto social: feminismo, derechos civiles, autonomías, etc., aunque lo que ha caracterizado estos últimos años ha sido el retorno a lo privado, la desmovilización social y las alternativas de grupos reducidos.

Por lo tanto, si entendemos el conflicto social o lucha de clases en un sentido positivo, no como una profecía que hay que cumplir ni como una lucha destructiva a cara de perro, sino como un proceso real —que debe verificarse— en el cual se configuran grandes agregados colectivos, se crean solidaridades y se confrontan proyectos, lo que realiza el

cambio social y el avance histórico, entonces llegaríamos a la conclusión que la lucha de clases se ha debilitado en los últimos años porque han faltado instrumentos de reconstrucción de la densidad del tejido social, y que la E.S. puede contribuir a esta reconstrucción.

e) *La Economía Social, una nueva vía?* No, no es válida ninguna afirmación unilateral y absoluta respecto a la Economía Social. En ningún caso, es la solución general, sino una solución complementaria de muchas otras, para el relanzamiento de la producción, para una mayor cobertura de las necesidades sociales y para la revitalización del sistema democrático y de la cultura civil. Por su heterogeneidad puede cumplir funciones muy distintas, ser un factor de innovación en unos casos y un reducto de marginalidad en otros, puede ser una base de superación de la atomización social o por el contrario puede acentuar la corporativización. Según el contexto o sistema en el que se inscribe puede jugar papeles muy diferentes; por ejemplo, en un marco político determinado por la acción de un gobierno de izquierda la Economía Social puede ser un gran instrumento para la programación democrática, descentralizada y participativa (lo que se propone ahora en Francia) mientras que si es una reacción frente a un gobierno neo-liberal (como Thatcher en Gran Bretaña) difícilmente podrá ser otra cosa que una salida defensiva y fragmentada.

Los grandes objetivos que puede contribuir a realizar la Economía Social son: mayor flexibilidad del sistema económico, desburocratización del Estado, más autonomía para los grupos sociales y los individuos, mayor seguridad contra los riesgos y las necesidades insatisfechas garantizadas complementariamente por las instituciones y los actores colectivos. La Economía Social no constituye en sí misma un nuevo modelo de sociedad, pero contribuye a forjar una vía que nos permite salir de los callejones sin salida que son hoy para las sociedades democráticas y capitalistas, desarrolladas y en crisis, el monetarismo y el neo-liberalismo, el keynesianismo ingenuo basado en el aumento indefinido del gasto público o el *welfare* tradicional cuyo objetivo principal es la redistribución del producto del crecimiento o el socialismo estatalista y autoritario que hoy ya no asegura ni el crecimiento ni menos aún la satisfacción de necesidades complejas y diversificadas.

10. La descentralización y la participación

Aun hoy, para muchos, socialismo y sobre todo marxismo implica el reforzamiento del Estado y de la centralización, la planificación autoritaria y la propiedad pública de gran parte de las empresas. Evidentemente, para una parte importante de la izquierda europea, y sobre todo para aquélla que ha estado confrontada a la práctica y a la reflexión urbano-regional, no se trata de esto. Casi podría decirse que más bien se pretende lo contrario. Por lo menos, si nos referimos a las alternativas entre centralización-descentralización y burocracia-participación. Veamos los aspectos principales de esta reflexión y de las propuestas descentralizadoras y participativas.

A) *La centralización como expropiación popular*

La existencia del Estado centralizado es hoy algo tremadamente negativo, tanto desde un punto de vista funcional (ineficiencia de las políticas sectoriales y de los servicios públicos) a lo que ya nos hemos referido, como desde un punto de vista democrático, en lo que respecta a su adecuación para promover la participación popular y el cambio social. Y esto por las siguientes razones: Primera, porque aleja los centros de decisión de los ciudadanos; alejamiento físico, pero también funcional; distancia creciente entre el momento y el lugar de tomar las decisiones y su ejecución, posibilidades de manipular a los usuarios o receptores de la acción pública, ejercicio de la autoridad sin posibilidades de control social, etc. Las clases populares, excluidas del poder económico y con escasa influencia sobre la burocracia, son las víctimas principales y mayoritarias de la centralización. Segunda, porque la centralización cuestiona y pone en crisis a las asambleas representativas (incluso el Parlamento central) incapaces de seguir la acción de los órganos ejecutivos, de la burocracia y de los "aparatos separados" del Estado. Son estas asambleas las instituciones a las que pueden acceder las clases populares; en la medida que precipita la crisis y la dependencia de los poderes locales, la centralización neutraliza las instituciones del Estado a las que pueden llegar los representantes directos e inmediatos de los trabajadores.

Las organizaciones sociales y los movimientos populares no encuentran en estas condiciones interlocutores políticos asequibles y con poder de decisión real. Tercera, el proceso de "tecnificación" y burocratización de la política, el desarrollo de organismos especiales y el enorme poder de los mass-media, facilita la influencia sobre los centros de decisión, por vías no públicas, de las minorías que detentan el poder económico (y también militar, cultural, etc.) al tiempo que hacen más inaprehensibles, inasequibles, inaccesibles, el poder político y la Administración Pública para las clases populares. La mayoría se refugia entonces en lo privado y reacciona con criterios gremiales o de grupo pequeño ante los problemas colectivos.

El resultado es el desprestigio de la democracia, de los partidos, de la política, para una parte creciente de la población. Los Estados modernos se basan entonces en un consenso pasivo, conservador en largos períodos, interrumpido por momentos de rebelión social con escasa capacidad de cambio global. Los partidos de izquierda, en la medida que participan en la superestructura del sistema, si no mantienen el arraigo en la sociedad civil estimulando movimientos sociales conflictivos frente al Estado y por la descentralización y democratización del mismo, se ven comprometidos en el mismo proceso de desgaste. La izquierda no puede aceptar la neta separación entre representantes y representados, ni dejar de oponerse a la hipertecnificación e hiperburocratización de la política y de la administración; ni puede participar, sin intentar modificarlas, en las estructuras centralizadas del Estado, ni puede asumir y practicar el mismo lenguaje esotérico, para la mayoría, de los administradores y de los funcionarios. La voluntad de promover cambios graduales y de forjar mayorías amplias para

reformas concretas no puede conducir a la confusión de todos los discursos o lenguajes políticos, con la consiguiente pérdida de identidad de la izquierda y de movilización popular. Y la necesidad —para hacer cambios sociales y económicos— de apoyarse en aparatos políticos fuertes del Estado no significa que deban ser muy centralizados. Porque no estimulan la participación y el apoyo popular y, desde la perspectiva de la izquierda, son aparatos políticos débiles: son escasamente transformadores en un sentido democrático y socialista.

El Estado centralizado significa hoy una *expropiación política de las clases populares*. No nos referimos a la pérdida de un poder que antes, en un pasado idealizado, tenían y ahora no tienen, sino que se trata sobre todo de una expropiación respecto a lo que pretenden ser los Estados democráticos representativos. En tales Estados se reconoce que la soberanía reside en el pueblo y que todas las instituciones del poder público deben ser representativas y controladas a través de sufragio universal; se considera que el desarrollo y el perfeccionamiento de la democracia deben conducir a aumentar la participación popular en la gestión pública y a garantizar, cada vez con más eficacia, que éste sirva los intereses de la colectividad y no los de tipo particular. En realidad el proceso de centralización conduce a todo lo contrario. Es también una expropiación en un segundo sentido: los instrumentos de intervención política forjados por las acciones populares, por las revoluciones democráticas y por las luchas de los trabajadores (los partidos, los sindicatos, los representantes en los poderes locales, las organizaciones campesinas y urbanas, etc.) pierden cuotas importantes de los poderes conquistados. Frente a esto surgen las propuestas de descentralización del Estado, de desarrollo de la democracia de base como complemento de la democracia representativa, de reforzar la organización y la actividad autónoma (la "politzación") de la sociedad civil. Pero para articular estas reacciones sociales y culturales con la acción dentro de los aparatos del Estado es necesario que los partidos de izquierda asuman y globalicen estos proyectos.

Hay un último aspecto, en general poco tenido en cuenta por la izquierda y por el pensamiento social de base marxista, al que queremos referirnos: la integración de las personas en comunidades de base territorial (locales, regionales, nacionalidades). No se trata de idealizar el territorio, pero sí de constatar que hay unidades territoriales forjadas por la historia y la geografía que tienen una entidad sociocultural, un patrimonio y un signo de identidad de la población. El pensamiento social y los partidos de izquierda se han movido muchas veces siguiendo orientaciones de división de la sociedad en grandes clases sociales, conceptos abstractos y universales, útiles en un análisis global del proceso histórico, pero muy insuficientes para analizar las realidades concretas. Para las clases populares la relación con el territorio y con las estructuras comunitarias con una base física (el barrio, la zona de trabajo, la ciudad, la comarca, la región) es fundamental: no disponen inicialmente de medios (económicos, políticos, culturales) para actuar individualmente a niveles más generales y abstractos, o para hacerlo de una manera activa y organizada,

sino que necesitan estar integrados primero en estas estructuras de base. Cuando no es así se da una falsa participación en lo "universal", de carácter alienante, a través de los *mass-media* (programas de televisión producidos por las multinacionales del imperialismo), de las pautas culturales de la sociedad de consumo y despilfarro, del falso cosmopolitismo de viajes organizados por *tours-operators*, etc. En el mejor de los casos se da una participación pasiva: son las grandes organizaciones políticas o sindicales las que en nombre de los trabajadores toman posiciones de carácter general, internacional, etc.

En los últimos años las ciencias sociales han revalorizado la división territorial. El análisis electoral ha reconocido que las dimensiones sociales y económicas no son suficientes para explicar los comportamientos políticos y ha recuperado a la geografía electoral. Un barrio o una ciudad tienen una historia, una vida colectiva, un sistema específico de relaciones que los distingue de otros barrios o de otra ciudad con la misma estructura de clase. El desarrollo de los movimientos urbanos y la reaparición de movimientos de base regional o nacionalista dentro de los Estados capitalistas (en España, Francia, Inglaterra, etc.) ha planteado con mucha fuerza y actualidad la realidad de la dirección territorial comunitaria.

Para las clases populares la recuperación y reconstrucción de estas estructuras territoriales es una cuestión fundamental en su proceso de organización, en su capacidad de intervenir en la política y de relacionarse con las instituciones. Estas estructuras territoriales comunitarias permiten recuperar la historia, el patrimonio colectivo de las clases populares y proyectar de una manera activa el futuro. Son un medio para forzar alianzas de clase sobre la base de problemáticas concretas y de que se establezcan relaciones positivas entre las clases trabajadoras o populares y las clases medias, contra las oligarquías, los monopolios y las altas esferas burocráticas.

B) *La demanda social y política y las necesidades funcionales*

Resulta casi un tópico hablar de la necesidad moderna de descentralización territorial y funcional de las Administraciones públicas y de participación de los ciudadanos en la elaboración y ejecución de los proyectos y programas y en la gestión de los servicios públicos. Esta necesidad es especialmente apremiante en la actividad de los poderes locales que cumplen unas funciones que suponen un contacto cotidiano con el conjunto de la ciudadanía.

1. *Razones generales en favor de la descentralización y la participación*

a) Contrarrestar los efectos negativos del desarrollo moderno de la Administración y de los servicios públicos que se traducen en una gestión cada día más centralizada en la toma de decisiones y más burocratizada en la elaboración y ejecución de éstas. Las Administraciones Públicas se sectorializan, con lo cual se pierde la coherencia de la globalidad, y hasta la coordinación más necesaria. En la gran ciudad especialmente la distancia Administración-Ciudadano es cada vez mayor, y un

objetivo fundamental de la descentralización y de la participación es reducirla considerablemente.

b) El crecimiento urbano, la concentración de la población en unos puntos del territorio, el abandono de otras zonas y la suburbialización de las áreas periféricas de los centros más importantes, todo ello ha generado grandes desequilibrios y profundas desigualdades en el espacio y entre los grupos sociales en cuanto al acceso a los bienes y servicios urbanos. La descentralización y la participación se propone siempre contribuir al reequilibrio del territorio y combatir las desigualdades sociales en la ciudad. Y para ello se debe dar más "poder" a las zonas más deficitarias.

Es decir, que descentralización y participación son instrumentos políticos al servicio de unos contenidos de política municipal de carácter democrático e igualitario, de una política que pretende acercar la administración a los interesados y darles medios para que intervengan en la gestión municipal cotidiana.

c) La política municipal requiere el acuerdo de los ciudadanos, y por lo tanto información, recepción de críticas y demandas, fiscalización o control de los servicios o actividades públicas por parte de los interesados o usuarios, diálogo, negociación y cooperación activa de los ciudadanos. Sin ello, la legitimación de la actuación pública será insuficiente, se conocerán mal las necesidades (cambiantes) de la población y la eficacia de los servicios, y no se podrá contar con la iniciativa y la colaboración de los ciudadanos (lo cual, cada vez es más indispensable para resolver la casi cuadratura del círculo que representa el mayor crecimiento de las necesidades respecto a los recursos públicos).

d) La descentralización municipal hace posible la reestructuración del territorio, tanto desde el punto de vista funcional (ámbitos adecuados a la prestación de los servicios públicos actuales) como político-cultural (reconocimiento de estructuras comunitarias o de identidades locales de base). Esta reestructuración del territorio, especialmente en las grandes ciudades y áreas metropolitanas se plantea a la vez a un nivel inframunicipal (distritos y/o barrios) y supramunicipal (comarcas, entidades metropolitanas, mancomunidades).

Descentralización y participación son procesos políticos originales según las características propias del Estado y de la coyuntura que vive cada país. Por esta razón conviene referirse concretamente al caso español, lo que no hemos hecho cuando hemos tratado del urbanismo o de la cooperación social.

2. *Descentralización y participación en la política municipal*

En España la descentralización municipal y la participación ciudadana se han planteado como exigencias ineludibles y se han convertido en objetivos inmediatos para los nuevos ayuntamientos en mucho mayor grado que en el resto de Europa. Y eso ha sido así no solamente porque los primeros ayuntamientos elegidos desde los años treinta han coincidido con la actualidad de esta temática y la puesta en práctica en la política descentralizadora y participativa en los Estados más próximos en todos los sentidos al nuestro, sino también por causas específicamente españolas:

a) En los últimos años del régimen político anterior se desarrollaron importantes *movimientos populares urbanos* y se creó un relativamente importante *tejido asociativo*. Se generó así una cultura urbana y municipal de carácter democrático y progresista que insistía especialmente en los aspectos participativos y en la proximidad de los poderes locales respecto a los ciudadanos. Las asociaciones y movimientos recuperaron o construyeron verdaderas identidades colectivas en los barrios y fueron instrumento de cristalización y experimentación de intereses locales infra o supramunicipales. Si bien estos fenómenos no se dieron en todas las ciudades ni en todos los barrios sí que han sido el punto de referencia legítimo para toda la ciudadanía activa.

b) El crecimiento urbano acelerado y con altos costes sociales iniciado a finales de los cincuenta y la política urbana de carácter segregacionista y desequilibrador que perduró hasta finales de los setenta han dado lugar a *grandes déficits y a grandes desigualdades* en las ciudades y en las áreas metropolitanas. La demanda de descentralización y de participación es especialmente fuerte cuando hay grupos y zonas que exigen una atención especial.

c) La victoria de las candidaturas de izquierda en la mayoría de municipios grandes y medianos en 1979 llevó a los ayuntamientos a unas fuerzas políticas y a unos candidatos que, o procedían directamente del asociacionismo ciudadano y de la oposición urbana y municipal o bien habían asumido por lo menos las propuestas descentralizadoras y participativas. *Los programas municipales de los nuevos equipos de gobierno* incluían siempre la descentralización y la participación, lo cual era incluso aceptado en principio por los sectores más moderados o conservadores.

d) La *lógica de las autonomías* genera una crítica sistemática al centralismo y legitima todas las ideas y aspiraciones descentralizadoras y participativas. Se va concibiendo el Estado no tanto, o no únicamente, como una superestructura lejana, sino como una articulación de instituciones que deben llegar a ser un verdadero tejido capilar en la sociedad y susceptibles de estar sometidas al control cotidiano por parte de ésta.

e) La descentralización es entendida como un aspecto fundamental del proceso político democrático y no como desconcentración administrativa o funcional de los ayuntamientos, aunque ésta le acompañe. Se requerirá de la descentralización que dé lugar a estructuras políticas representativas (mejor si son elegidos directamente y corresponden a unidades territoriales que sean significativas y viables). Así mismo se exigirá que los entes descentralizados tengan verdaderas competencias, específicas y decisorias, y recursos financieros y humanos para ejercerlas. Lo cual supone un cierto grado de autonomía respecto al ayuntamiento madre, es decir, no una dependencia orgánica completa. Por último, se considerará que la descentralización debe servir para desarrollar la participación ciudadana, la cooperación social y la vida asociativa, como veremos enseguida.

3. *La demanda de descentralización y participación del asociacionismo ciudadano*

Las asociaciones de vecinos y otras entidades ciudadanas han planteado, a lo largo de los últimos años, un conjunto de reivindicaciones y propuestas relativas a la participación y, en menor grado, a la descentralización municipal. Creemos interesante resumirlas aquí, sobre la base de los documentos y conclusiones presentados y aprobados en reuniones de coordinación general del movimiento ciudadano.

a) Las asociaciones y entidades ciudadanas defienden la descentralización, sobre todo como condición previa o favorable para la participación. En consecuencia, se propone que los mecanismos descentralizados de barrio o de distrito incorporen la participación popular, bien en su misma composición, bien mediante reuniones o asambleas periódicas con representantes de todas las entidades, o bien a través de comisiones de base territorial o sectorial. En muchos casos se pide participar no solamente en la elaboración de los proyectos y luego en la gestión o ejecución, sino también en los órganos o momentos de toma de decisión, a lo cual difícilmente pueden acceder los ayuntamientos.

b) Descentralización del ayuntamiento a través de Consejos o Junta de distrito o de barrio que lleguen a ser de elección directa y tengan competencias y recursos propios. También se ha propuesto en algunos casos la descentralización de las Diputaciones en ámbitos comarcales. El asociacionismo moderno considera que lógicamente cuanto más descentralizado esté el poder local real más podrá influir sobre él.

c) Reconocimiento de las asociaciones de vecinos y entidades ciudadanas como de interés público o de interés municipal. Derecho a la información preferente por parte del ayuntamiento y a la consideración de entidades "interesadas" en todo lo que se refiera a la política municipal. Promoción y apoyo por parte de los ayuntamientos a las asociaciones vecinales y entidades ciudadanas (locales, financiación, presencia en los centros cívico-culturales, etc.).

d) Reconocimiento del derecho de propuesta o de iniciativa popular, debiéndose fijar el plazo y el órgano municipal que debe dar una respuesta motivada. Derecho a referéndum municipal o consulta popular que puede ser promovida por el mismo ayuntamiento o por entidades o vecinos (fijándose un mínimo de demandantes).

e) Regulación del derecho de asistencia a las reuniones de los órganos municipales: Pleno, Comisión Permanente, Comisiones, etc. Posibilidad de tener derecho a voz o a dirigirse a los miembros del consistorio por otros medios (por escrito, en sesiones especiales, oficinas, etc.). Facilitar el acceso del público a las reuniones del pleno municipal (horarios y locales adecuados, información previa, etc.). Desarrollo de nuevas formas de información municipal y de diálogo con los ciudadanos o de recepción de sus demandas (por ejemplo, radios municipales). Oficinas de información y horarios de la Administración que no coincidan con las laborales para facilitar el acceso de los ciudadanos al ayuntamiento.

f) Participación de las entidades representativas de los vecinos y usuarios en la elaboración de los presupuestos municipales y de los proyectos y programas urbanísticos, de equipamientos y de vivienda. Participación de estas entidades en la gestión y/o en el control de los servicios públicos y municipales, en especial en aquéllos que, por su carácter (cívico, cultural, deportivo, social, etc.) mejor se presten a ello y tengan un ámbito territorial determinado (el barrio, todo el municipio cuando es pequeño o mediano).

En resumen, y resumiendo todo lo dicho hasta ahora, el asociacionismo urbano, entendido como participación cívico-política, cumple funciones de información, de expresión de demandas, de reivindicación o presión, de control o fiscalización, de legitimación o consenso, de innovación, de ampliación de la representatividad institucional, de negociación, de cooperación, de solidaridad, de recuperación o de creación de identidades colectivas locales, de integración en la sociedad global y de adquisición de conciencia cívica general, y de cambio social y político para el desarrollo democrático.

11. Conclusión: ¿Puede aún hablarse de marxismo urbano?

Por todo lo dicho hasta ahora, parece razonable preguntarse si las nuevas propuestas urbanas de la izquierda tienen mucho que ver con el marxismo. El replanteamiento teórico-político que, implícitamente, está en la base de las propuestas del nuevo urbanismo, de la cooperación social o de la descentralización municipal es radical. Y no hemos hablado de otras cuestiones que podrían resultar aún más novedosas desde una perspectiva tradicional, marxista o de izquierda: la necesidad de una oferta política de autoridad y seguridad, la posibilidad de que el mercado asigne una parte de los servicios que ahora presta la Seguridad Social, o la sustitución del esquema convencional de lucha de clases por la dialéctica consenso-marginalidad. Pero a partir de lo dicho hasta ahora y sin repetir las argumentaciones expuestas, intentaremos resumir en diez puntos las consideraciones generales que nos parecen más representativas de este replanteamiento del marxismo en relación a la ciudad y a la política local.

1º *La crisis de la ciudad actual no es exactamente la crisis de la "ciudad capitalista"*, sino de la ciudad industrial del siglo XIX que ha crecido de forma desenfrenada a lo largo del siglo XX (el capitalismo viene de mucho antes y es posible que perdure mucho más que el modo de producción industrial). Nos enfrentamos a la crisis del urbanismo del crecimiento cuantitativo y de las infraestructuras basadas en tecnologías que sólo realizan obras gigantescas y que requieren energías duras. No solamente los mecanismos y los actores capitalistas son responsables de esta situación: lo es el Estado y el conjunto de la sociedad que ha optado por unos modelos de crecimiento, de producción y de consumo, y de organización social y territorial, que nos han llevado hasta aquí. Por esta razón la crítica y la alternativa a la crisis de la ciudad industrial no es necesariamente "anticipi-

talista" ni "socialista", aunque puede contener elementos socializadores e igualitarios.

2º La contradicción territorial hoy no es la de campo-ciudad, sino la que se expresa entre zonas con *niveles de poder y de equipamiento desiguales* dentro de un espacio que tiende a la urbanización generalizada. Las oposiciones centro-periferia o entre barrios deteriorados y barrios donde se concentran las rentas diferenciales son elementos clave de la dialéctica territorial. En los últimos años se han manifestado unas fuertes presiones sociales en favor de una ciudad más igualitaria y de un urbanismo que tenga como objetivo principal la calidad de la vida. Se asiste a un interesante fenómeno social de recuperación de la ciudad, por parte de los sectores populares y medios, y especialmente por parte de algunos grupos subalternos o marginados, como los jóvenes. Es seguramente el fin de la ciudad productivista y del urbanismo funcionalista y atomizador, ideas de las que había participado la izquierda marxista (en épocas en que ciertamente tenían un sentido más racionalizador y progresista). Pero también es la recuperación de viejos ideales socialistas, sobre la ciudad como espacio convivencial.

3º La *conflictividad urbana* no se superpone exactamente, no es homologable, a la lucha de clases tal como la ha entendido en general el marxismo, que se da en la producción (que además hoy, cuando las categorías de status parecen pesar mucho más que las clases de antaño, merecería ser revisada). La complejidad de las contradicciones urbanas y la diversidad de los actores sociales exigen un instrumental teórico que por ahora resulta muy heterogéneo e insuficiente. Ahora bien, sí que merece destacarse el reconocimiento que debe atribuirse sobre todo a la ciencia social urbana de base marxista de los *movimientos urbanos* como un actor fundamental para explicar la dinámica urbana actual (movimientos urbanos por lo demás muy diversos, que pueden ser, por ejemplo, expresión de reivindicaciones de sectores sacrificados por la política urbana o, en otros casos, movimientos de base fundamentalmente cultural que defienden una determinada concepción de la ciudad y de las relaciones sociales urbanas).

4º *El discurso sobre las Autonomías regionales y locales y sobre la Descentralización* supone una concepción del Estado que no tiene mucho que ver con la tradicional del marxismo: el Estado instrumento de una clase dominante. Al Estado-persona se le sustituye por el Estado-ordenamiento, producto de la confrontación y del consenso de todas las fuerzas sociales. Su democratización no se busca a través de su ruptura, sino por su ramificación y apertura hacia toda la sociedad. No es la sociedad civil la que debe ser transparente sino el Estado. La perspectiva socialista se plantea sobre todo en términos de socialización política gradual y no únicamente de socialización económica a través de una revolución política originaria. Los poderes locales se convierten en instrumento fundamental de este proceso de socialización política.

5º La transformación social igualitaria ya no se hace depender únicamente de la *estatización* de la economía y, por lo que se refiere a la política

urbana y municipal, de los equipamientos y servicios públicos y del planeamiento urbanístico imperativo y detallista. Por el contrario, se pretende que el mercado y la cooperación social contribuyan a realizar los objetivos igualitarios, sin pretender tampoco practicar una política formalmente igualitaria que conduce a consolidar las diferencias existentes. Hay una relación entre la descentralización del Estado, el urbanismo de objetivos y de gestión y la colaboración sector público-sector privado para cubrir necesidades sociales que tradicionalmente se consideraba que debían ser competencia exclusiva del Estado.

6º No es fácil compaginar los esquemas sobre la *lucha de clases* con las propuestas de *solidaridad y cooperación sociales* que se avanzan desde la política urbana y municipal de izquierdas. La ciudad de hoy es escenario de confrontación de corporativismos o gremialismos, de particularismos e individualismos. Lo cual tampoco tiene demasiado que ver con la lucha de clases entendida en sentido marxista. La izquierda, sin embargo, no propone tanto sustituir o superar el neocorporativismo por el clasismo tradicional, sino que insiste en otro tipo de propuestas como la dimensión constructiva de los movimientos urbanos y de las organizaciones sociales para que asuman la solución de problemas ciudadanos y de déficits de servicios o la invención de nuevos roles y responsabilidades para que la parte creciente de la población sin trabajo ni esperanza de tenerlo encuentre una función útil e integradora.

7º Resulta evidente que la izquierda urbana no propone *ninguna perspectiva revolucionaria* en el sentido estricto que debe concederse a un concepto como el de revolución. La izquierda urbana es y se asume ya como *reformista*, que ya no teme no solamente el gradualismo y el respeto escrupuloso de la legalidad y de las instituciones, sino que se propone objetivos antes tan denostados como el de la *integración socio-cultural* de las clases trabajadoras afectadas por la subalterneidad y el del *consenso* considerado indispensable para la realización de los cambios y reformas más indispensables.

8º Un componente especialmente novedoso de la izquierda urbana, y que seguramente hubiera complacido a Marx, pero que los marxistas, en general, han considerado poco y mal, es el de la valorización de la *continuidad de la ciudad*, del simbolismo del espacio, de la memoria colectiva, del valor del territorio como historia, de la importancia de las comunidades locales. Todo esto ya no es "passeísmo", sino el medio de reforzar la sociedad civil y de hacerla interlocutor activo del

Estado descentralizado. Y también es una propuesta de vida más compleja y menos organizada por aparatos externos (Estado o grandes empresas). La ciudad es considerada como un gran instrumento de integración social, como un espacio de convivencia y como un medio de expresión de los diferentes grupos.

9º La *revolución tecnológica de nuestra época es la informacional*. El peligro de la descentralización y de las autonomías locales es el de la pobreza y de la dependencia informacional. Hoy el control de la información tiende a ser casi más importante que el control de la producción, de las finanzas o del suelo. Un doble objetivo deben entonces plantearse los poderes políticos democráticos al respecto: disponer de estructuras informacionales competitivas a nivel internacional (por ejemplo, información de los mercados mundiales) y proporcionar a la sociedad medios de información-expresión propios que consoliden las identidades locales (por ejemplo, radio-televisión municipales y/o autogestionadas).

10º Los viejos objetivos de *igualdad y de libertad* hoy no se esperan conseguir por la vía de la homogeneidad de una sociedad uniforme y transparente ni mediante la "administración de las cosas" por parte de un Estado organizador de toda la vida social. Se defiende la *diferencia y la multiplicidad de actores sociales* y se considera que hacen falta competencia y participación para que se combinen armoniosamente objetivos que pueden resultar contradictorios.

Y bien, ¿todo esto tiene aún algo que ver con el *marxismo*? Nos parece que es una discusión intelectualmente sin demasiado interés, aunque puede tener alguna significación política. Si por marxismo entendemos una doctrina o una ideología más o menos codificadas es evidente que todo lo expuesto guarda una relación escasa con él. Pero si consideramos al marxismo como la expresión cultural más acabada de los movimientos de liberación social de los siglos XIX y XX entonces la relación es fundamental. O así nos lo parece. Los objetivos que se proponen y los presupuestos metodológicos en que se apoyan no significan una ruptura con la tradición de la izquierda.

Aunque nos parece que con estos planteamientos se ha llegado a un punto límite. El desarrollo de estas posiciones y propuestas se situará tan lejos de lo que se ha entendido por marxismo, que para la izquierda del siglo XXI la relación con el marxismo será a la vez tan fundamental como irrelevante, como ocurre ahora con la economía clásica o la teoría política democrática. ■